VIENE DE LA 1

Sin embargo, su ayuno parece haber tenido el resultado que esperaban: se ha ofrecido poner en libertad a un indio preso en la cárcel de Huejutla por delitos que no cometió, y se ha ofrecido también arreglar problemas de tierras en Chiapas. Su doble querella forma parte del conjunto de demandas permanentes, en esa parte oscura de la sociedad a la que no queremos acercarnos en las ciudades, el de la persecución, explotación, opresión a los indios. Ningún obispo, por ejemplo, ha amenazado cerrar los templos en exigencia de respeto a los derechos humanos de esta franja, cada vez menos ancha, de la baja sociedad mexicana, como si ante ellos no fuera necesario practicar la conducta del Buen Samaritano.

Durante una semana, los 13 ayunantes indios sostuvieron pláticas con representantes de la Secretaría de Gobernación y el gobierno hidalguense en busca de solución a sus peticiones, que se resumen en una muy simple: la aplicación de la ley. Algo tan sencillo como eso no es fácil, sin embargo, y menos en la circunstancia actual en Hidalgo: el gobernador ha tomado tan en serio la operación Terminal —que como su nombre lo indica dedicará los meses siguientes a disponer el fin de su administración— que ha cedido buena parte de sus atribuciones a su secretario general de gobierno, José Guadarrama, un político a la vieja usanza no obstante que no tiene edad para serlo, que se sirve con la cuchara grande y crea y prolonga conflictos para luego hacerla de apaciguador y cobrar réditos políticos por ello.

Se han dado seguridades a los ayunantes indios de que, a cambio de cesar su huelga de hambre, mucho menos glamorosa que la concluida en Ciudad Juárez y Chihuahua el 10 de agosto, sus demandas específicas serán satisfechas. Será posible medir el grado de respeto, de cumplimiento a un compromiso, el honor que a su palabra hagan los funcionarios involucrados en la cuestión, y decirlo.

Claro, ninguno de los huelguistas de la Catedral (ni siquiera el diputado panista Manuel Bribiesca, que el viernes 15 debió concluir su propia acción, sin haber reunido el millón de firmas que se había propuesto) concitó la atención pública puesta sobre don Luis H. Alvarez porque, entre otras cosas, él es un ex candidato a la presidencia de la República, alcalde con licencia de una capital de estado, y cabeza de una corriente de fuerte presencia electoral en aquella entidad. Eso explica, asimismo, por qué el cese de su ayuno se ha convertido en piedra de toque para el inicio de una novedosa forma de participación política en que confluyen agrupaciones y personajes de izquierda y de derecha.

Este movimiento tal vez anuncia una muy amplia concertación de las fuerzas de oposición, posible en la medida en que el gobierno ha ofendido de diversas maneras a los segmentos varios que le son adversos. Firman el documento que le da origen tres ex candidatos a la Presidencia de la República, en una gama tan amplia que va de doña Rosario Ibarra de Piedra hasta el ingeniero Pablo Emilio Madero (y en medio de ellos Arnoldo Martínez Verdugo). Es verdad que pudieron reunirse antes, en vísperas de las elecciones de 1982, invitados por la Unión de Periodistas Democráticos, junto con don Manuel Moreno Sánchez, Ignacio González Gollaz y Cándido Díaz Cerecedo, que también eran candidatos. Pero ahora inician una campaña por la democracia, que constituye la primera expresión práctica de la nueva visión con que el ingeniero Heberto Castillo, líder del PMT y promotor de la idea, está apreciando la realidad política nacional, que consiste esencialmente en abrir un amplísimo marco de convergencia destinado a movilizar a la opinión ciudadana.

Estos dirigentes, y un abigarrado conjunto de personas, no tan variado como para que no predomine entre ellos la filiación derechista (pues sobresalen los candidatos panistas a gobernador Francisco Barrio y Manuel J. Clouthier, dirigentes del propio PAN como Bernardo Bátiz y Norberto Corella, diputados de ese partido como Eduardo Turati, etc., invitaron a los tres ayunantes chihuahuenses a "marchar por toda la república para convocar al pueblo a organizarse en forma permanente, a fin de defender el sufragio efectivo y lograr la democratización de las organizaciones sociales".

Previamente, los firmantes reiteraron su diagnóstico y denuncia sobre lo ocurrido en algunas elecciones locales recientes. En su concepto, "la violación sistemática de los derechos humanos y en especial del derecho constitucional de los mexicanos a elegir a sus gobernantes, alcanza límites intolerables en Chihuahua, Durango y Oaxaca". Pero hacen una distinción de gran importancia entre los dos primeros casos y el tercero: "En Chihuahua y Durango, el fraude electoral designa gobernadores, alcaldes y diputados espurios", mientras que en Oaxaca dejan a salvo la elección de gobernador y legisladores al señalar que allí "se atropella al pueblo para imponer alcaldes".

Un llamado semejante —recorrer el país para organizar a los ciudadanos— había hecho en septiembre de 1971 el propio ingeniero Heberto Castillo. Sus acompañantes de entonces (Octavio Paz, Carlos Fuentes, Luis Villoro, entre otros) ya no están en lo mismo. Sólo él persiste. No deja de causar melancolía que a 15 años de distancia este batallador militante vuelva a empezar, sobre todo sabiendo que ya había incurrido en llamamientos previos, cuya frustración no le causó a él una frustración personal. El Movimiento de Liberación Nacional dejó, a la postre, alguna influencia ideológica, y no puede ignorarse la presencia conseguida por el Partido Mexicano de los Trabajadores. Estas dos iniciativas en que el ingeniero Castillo ha sido protagonista son, así, los antecedentes de esta campaña por la democracia que ahora, con aliados nuevos e inopinados, lo pondrá una vez más en caminos que paradójicamente, no ha cesado de recorrer.

No todos los involucrados en este movimiento son buscados y ni siquiera deseables. Tal es el caso de los dirigentes del Consejo de Seguridad Interamericano, que juzgó útil a sus fines difundir en Estados Unidos el mensaje que el ingeniero Castillo y sus cofirmantes lanzaron al pueblo mexicano. Ese texto, así como el "juicio moral" que tres miembros del Episcopado chihuahuense formularon tras declararse válidas las elecciones en su entidad, y el comunicado en que 21 intelectuales solicitaron la anulación de esos comicios, fueron incluidos en un desplegado que ese Consejo pagó en *The Washington Post* el 13 de agosto, mismo día en que se entrevistaron los presidentes de México y Estados Unidos en aquella ciudad. No fue altruismo democrático lo que movió al Consejo a pronunciarse en tal sentido, como no es tampoco entusiasmo cívico lo que impulsa a senadores como Helms o Deconcini a dar apoyo a los panistas. Se trata de funciones e intereses muy específicos. Basta recordar que el Consejo de Seguridad Interamericano organizó antes un coloquio en San Diego, y como resultado de la reunión publicó en el propio *Post* y otros diarios norteamericanos una declaración política con apreciaciones sobre la realidad interna mexicana; y que el promotor del cónclave y el documento (suscrito entre los mexicanos por el priísta Luis M. Farías, el panista José Angel Conchello y los escritores Margarita Michelena, Luis Pazos y Rafael Segovia), fue Daniel James, cuya adscripción a la CIA es un dato que a muchas personas parece inequívoco.

La breve visita del Presidente de la República a la capital norteamericana se desarrolló en dos planos: en el de la política interna debatida extra muros, y el de las relaciones bilaterales estrictamente hablando. Dos temas, para mí preocupantes, requerirán el seguimiento estricto de la negociación surgida en las pláticas presidenciales: la que concierne a un nuevo marco de comercio e inversiones, susceptible de resolverse en un acentuamiento, si cabe, de nuestra dependencia respecto de la economía norteamericana; y una atenuación de nuestra política exterior, especialmente la que concierne a Centroamérica. No es que nadie quiera una actitud rijosa en el Presidente de la República. Pero fue notorio el bajo perfil de la posición mexicana en cuestiones diplomáticas. Y no se diga que así fue porque el énfasis estaba puesto en los temas bilaterales: para Washington lo que atañe a la región centroamericana es asunto de seguridad nacional y por lo tanto abordable en una reunión de este género.

El narcotráfico ocupó también espacio amplio en las conversaciones de los presidentes y sus comitivas, en que también se ejerció presión sobre México. Por desgracia, al día siguiente de concluida la visita un episodio más en la negra narcodiplomacia en que por fuerza estamos involucrados, enturbió ese triste género de relaciones que ojalá no sostuviéramos: un agente de la oficina de narcóticos norteamericana, que opera en Guadalajara, fue detenido y se alega que torturado por la policía jalisciense. Nadie osaría poner la mano en el fuego por la rectitud de ninguna corporación policiaca, pero quizá el incidente, magnificado, sirva para obligar al gobierno mexicano a aceptar una injerencia en nuestros asuntos, que ni siquiera la descomunal presencia del narcotráfico, y su enorme peligrosidad, pueden inducirnos a admitir.

PLAZA DOMINICAL
17-AGO-86

CONCLUYO SU AYUNO

17-AGO-86

Indígenas hidalguenses levantaron su huelga de hambre ■ Foto: **Arturo Guerra**